

Título: Percepción de malas prácticas electorales en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022).

Autor: Adrián Enrique Romo Lomelí

Grado: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestrante en Asuntos Políticos y Políticas Públicas

Institución: El Colegio de San Luis A.C

Correo electrónico: adrianromolomeli@gmail.com

Introducción

Entre las diversas formas de gobierno que las naciones han adoptado para sus respectivas sociedades, se puede hablar de un incremento importante a partir de la segunda mitad del siglo XX de las democracias alrededor del mundo. Tras la experiencia que dejaron las dos grandes conflagraciones mundiales se puso en evidencia la necesidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos que habían sido flagelados por la relación de conflicto entre los Estados y al interior de estos entre los distintos grupos.

Desde este panorama, la democracia se asomaba a la escena internacional como aquella vía que estaba orientada a solucionar las disputas internas en los Estados y a solucionar conflictos por el camino de la participación de la ciudadanía, para que esta fuera una válvula de escape o desahogo de las tensiones. Dentro de los fundamentos centrales de la democracia se esgrime la posibilidad de las y los ciudadanos de ser partícipes en el proceso de toma de decisiones.

En las democracias modernas se ha seguido la ruta de la representación. Esta alternativa se ha justificado por la creciente complejidad de las sociedades, por lo que una democracia directa, en la cual la ciudadanía participará de forma habitual y constante, sería inviable. La facilidad que ha provisto la alternativa representativa es que una parcialidad de

la sociedad se haga cargo de los asuntos públicos que el grueso de la población le encomienda mediante diversos mecanismos.

Para la selección de los representantes que se harán cargo de los asuntos públicos de una sociedad por un determinado periodo de tiempo la democracia tiene un mecanismo básico de decisión en el cual la ciudadanía es el factor primordial, este mecanismo son las elecciones. Por medio de las elecciones la ciudadanía nombra y autoriza a un número determinado de personas para que ejerzan las funciones públicas, las cuales estarán orientadas a un proyecto político concreto el cual obtuvo dicha autorización.

La importancia de las elecciones radica en que son un medio por el cual se legitima a la autoridad emanadas de ellas, ya que las y los ciudadanos plasman en las boletas electorales su preferencia política hacia algún partido, candidato o candidata o proyecto político. Para que exista la mencionada legitimidad, la participación de la ciudadanía en los comicios debe estar regida por los principios democráticos de libertad e igualdad política.

En la actualidad, las elecciones en México se llevan a cabo bajo la influencia de diversos factores que obedecen a las características inherentes de cada entidad federativa. Los estados de la república tienen procesos electorales propios, en los cuales se seleccionan a los funcionarios que han de desempeñar los cargos públicos. Estos procesos son administrados por los Organismos Públicos Locales Electorales y las autoridades jurídicas especializadas en la materia de cada estado miembro de la república mexicana, los cuales se encargan de operar cada etapa del ciclo electoral y resolver las controversias correspondientes.

En la disputa por los cargos públicos, los diferentes actores políticos que interactúan y compiten por su obtención, en ocasiones recurren a prácticas que están fuera de los límites que contempla la legislación vigente en materia electoral, con la finalidad de conseguir ventajas en la competencia respecto a sus opositores. Estas prácticas tienen como objetivo, por lo regular, influir en las preferencias políticas de los individuos y en la forma en cómo se manifiestan esas preferencias.

Estas prácticas (que en la literatura son denominadas malas prácticas electorales) tienen múltiples matices, que pueden ir desde el financiamiento ilícito de las campañas hasta

la coacción del sufragio. En las entidades federativas del país, la reproducción de malas prácticas electorales es una situación recurrente durante los procesos electorales locales, ya que los actores políticos ponen en marcha su maquinaria para orientar los resultados de los comicios a su favor.

La presencia de malas prácticas electorales en los estados es diversa, debido a que algunas malas prácticas se repiten con una mayor frecuencia que otras, precisamente por la multiplicidad de factores que están presentes en las entidades de la federación. La reproducción de estas prácticas tiene una relación negativa directa con la integridad electoral del proceso, erosionando las etapas y la posterior legitimidad gubernamental de las candidatas y candidatos electos.

La ciudadanía que se encuentra expuesta a las malas prácticas electorales de los distintos actores políticos es vulnerada en sus derechos de participación en las elecciones bajo los principios de libertad e igualdad política. Estos principios se transgreden por la presencia de factores que condicionan el posicionamiento del elector frente a las opciones en competencia. De esta manera, la limpieza del proceso electoral, así como su credibilidad, son lesionadas.

En 2021, se realizaron las elecciones para la gobernatura del estado de San Luis Potosí, resultando electo un candidato de un partido diferente al que hasta entonces se encontraba en el gobierno. En 2022, en el estado de Aguascalientes las elecciones para la gobernatura tuvieron como resultado el triunfo de una candidata del mismo partido que en ese momento ocupaba el poder ejecutivo. Estos procesos electorales no estuvieron exentos de quejas y denuncias en sus distintas etapas por presuntas malas prácticas electorales. Este trabajo de investigación tiene como finalidad abordar la percepción que se tuvo acerca de la presencia de estas malas prácticas electorales en las mencionadas entidades federativas por medio de la recreación del ciclo electoral por parte de funcionarios públicos que participaron en la operación de los comicios.

Reformas electorales y conflictividad en México

Las reformas en materia electoral en México tienen un antes y un después de las establecidas en el año 1977, ya que estas reformas fueron resultado de presiones internas al sistema político que se vio deslegitimado por la presentación de un candidato único a la Presidencia de la República en la figura de José López Portillo en 1976, por lo que los cambios en el sistema electoral eran imprescindibles.

Las principales reformas al sistema electoral mexicano desde el año 1977 hasta el año 2014 se encuentran resumidas en la Figura 1.

Figura 1. Reformas electorales en México

Año de la reforma	Contenido
1977	<ul style="list-style-type: none"> a) Se tipifica a los partidos políticos como entidades de interés público. b) Principal actividad de los partidos políticos es promover la participación ciudadana en la vida democrática. c) Les concede a los partidos políticos de acuerdo con su peso electoral específico acceso a los medios de comunicación. d) Se sustituye el régimen electoral mayoritario para la conformación de la Cámara de Diputados por un sistema electoral mixto. e) En el artículo 53 constitucional se divide la demarcación electoral en 300 distritos electorales. f) Se comienzan a elegir a 300 Diputados por el principio de mayoría relativa y 100 Diputados por el principio de representación proporcional. g) En el artículo 60 de la constitución se establece la obligación de la Suprema Corte de conocer las inconformidades por posibles violaciones al proceso electoral. Se incorpora el sistema de calificación de las elecciones.

	<p>h) En el artículo 73 constitucional se establecen modalidades de democracia semidirecta: la iniciativa popular y el referéndum, ambos para el caso del entonces Distrito Federal.</p> <p>i) Creación de la figura de asociaciones políticas nacionales.</p> <p>j) Se establece el mecanismo de registro condicionado de los partidos políticos al resultado de las elecciones (1.5% de la votación nacional).</p> <p>k) Le corresponde a la Comisión Federal Electoral el otorgamiento o retiro del registro a los partidos políticos.</p> <p>l) La designación de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla la realizan los comités distritales electorales y desaparece la facultad de los partidos políticos de proponer a los miembros de las mencionadas mesas directivas.</p>
1986	<p>a) La Cámara de Diputados se conforma por 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional.</p> <p>b) Tienen derecho a participar en el principio de representación proporcional todos los partidos políticos que alcancen el 1.5% de la votación nacional.</p> <p>c) El partido mayoritario tiene derecho a participar en la distribución de diputaciones por el principio de representación proporcional siempre que la suma de las diputaciones que obtenga por mayoría relativa no exceda la que representa su votación. Ningún partido político puede exceder el 70% de la Cámara de Diputados (350 curules).</p> <p>d) Se establece la cláusula de gobernabilidad, la cual asegura que si un partido político no obtiene el 51% de la votación nacional se le asignaran las curules necesarias para que alcance la mayoría absoluta.</p> <p>e) La Cámara de Senadores se renueva en su 50% cada tres años.</p> <p>f) Se constituyen 5 circunscripciones plurinominales para la elección de los 200 Diputados por el principio de representación proporcional.</p>
1987	<p>a) Se establece el derecho de los partidos políticos y de las asociaciones políticas nacionales de obtener financiamiento público de acuerdo con su votación obtenida.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b) Se elimina el registro condicionado y se reintegra el registro permanente de los partidos políticos. c) Se incorpora al Tribunal de lo Contencioso Electoral como órgano jurisdiccional competente en la materia. d) Se reglamentan las fases del proceso electoral desde los actos preparatorios de las elecciones hasta el cómputo de los votos. e) Se facilita la integración de coaliciones para presentarse a elecciones. f) La representación de los partidos políticos en la Comisión Federal Electoral se establece en función de su fuerza electoral. Ningún partido podrá tener más de 16 representantes. g) Se elimina el sistema de doble voto para la Cámara de Diputados. Se establece el sistema de una boleta un voto.
1990	<ul style="list-style-type: none"> a) Se establece que la organización de las elecciones federales debe de quedar a cargo de un organismo autónomo en la materia. Se constituye el Instituto Federal Electoral sustituyendo a la Comisión Federal Electoral con patrimonio y personalidad jurídica propia. b) Se constituye al Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo en la materia. Las resoluciones del Tribunal solo podrán ser modificadas por los colegios electorales. c) Se determinan las direcciones ejecutivas que estarán a cargo del Instituto Federal Electoral, como el Registro Federal de Electores. d) Expedición de una nueva credencial de elector con fotografía y reconocimiento de su validez como identificación oficial. e) Se incorpora la figura de los delitos electorales. f) Adiciones al Código Penal para castigar actos relativos al fraude electoral con relación al registro de ciudadanos.
1993	<ul style="list-style-type: none"> a) Finalización del sistema de autocalificación de las elecciones y se instaura un nuevo sistema de calificación de las elecciones, el cual se compone por dos momentos, uno le compete al Instituto Federal Electoral y otro al Tribunal Federal Electoral.

	<ul style="list-style-type: none"> b) Se le confiere el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia al Tribunal Federal Electoral. c) Se establece que en ningún caso un partido político podrá con más de 315 Diputados por ambos principios de elección. d) Para la elección de Senadores, cada estado contará con 4, 3 por el principio de mayoría relativa y 1 por el principio de primera minoría. e) El registro condicionado de los partidos políticos se sujeta a la participación en actividades políticas propias e independientes. Los partidos políticos con registro definitivo los conservará obteniendo el 1% de la votación. f) Las coaliciones se complejizan al implementar que el partido que participe en coalición sin alcanzar el 1.5% de la votación pierde el registro. g) El financiamiento de los partidos políticos se compone por los siguientes rubros: el público, el de la militancia, el de los simpatizantes, autofinanciamiento y producto de rendimientos financieros. h) Establecimiento de reglas para el uso y disposición de medios de comunicación (radio y televisión) por parte de los partidos políticos. i) Las Juntas Distritales Ejecutivas correspondientes determinarán los topes de gasto de campaña para cada uno de los distritos electorales uninominales (en el caso del entonces Distrito Federal).
1994	<ul style="list-style-type: none"> a) Prohibición a los ministros de culto de inducir al electorado a votar o no por algún partido político o a la abstención. b) Imposición de multa o prisión a los servidores públicos que obliguen a sus subordinados a votar a favor o en contra de algún partido político o candidato. De igual manera se procederá contra el servidor público que destine fondos o bienes públicos que tenga a su disposición al apoyo de algún partido político o candidato. c) La organización de las elecciones estará a cargo de un órgano autónomo, el cual estará integrado por Consejeros Ciudadanos.

	<ul style="list-style-type: none"> d) Los magistrados del Tribunal Federal Electoral estarán obligados a satisfacer los mismos requisitos que están establecidos para los ministros de la Suprema Corte. e) Se disminuye en 5 veces el tope de gasto de campaña. f) Se crea la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. g) Se establece la figura del visitante extranjero.
1996	<ul style="list-style-type: none"> a) Se establece a nivel constitucional la afiliación individual a los partidos políticos. b) Autonomía del Instituto Federal Electoral respecto al Poder Ejecutivo. c) Creación de la figura de Consejero (a) Electoral y Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral. d) Disminución de 315 a 300 Diputados como máximo por partido. Además, se establece el 8% como tope de sobrerrepresentación para la mayoría legislativa. e) El Senado estará compuesto por 128 Senadores, los cuales 2 serán elegidos por cada estado por el principio de mayoría relativa, 1 por el principio de primera minoría y los 32 restantes por el principio de representación proporcional, votados en una sola circunscripción plurinominal nacional. f) El Tribunal Federal Electoral pasa a ser parte del Poder Judicial. g) Desaparece el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados trasladando dicha función al Tribunal Federal Electoral. h) Elección directa del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal a partir de 1997. i) Los partidos políticos que no obtengan al menos el 2% de la votación en las elecciones federales ordinarias les será cancelado el registro. j) El acceso a los medios de comunicación se distribuirá de la siguiente manera: 30% equitativamente y el 70% restante en función de la fuerza electoral de cada partido político. k) Ningún partido político podrá recibir anualmente aportaciones de simpatizantes superiores al 10% del financiamiento público. Se

	<p>establecen los límites a las aportaciones de dinero que realice cada persona física.</p> <p>l) Queda establecido que el día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores no se permitirán actos de campaña. Por otro lado, queda prohibido durante los 8 días anteriores a la jornada electoral difundir resultados de encuestas y sondeos de preferencias electorales.</p>
2003	<p>a) Decrece el número necesario de asociados para constituir agrupaciones políticas nacionales de 7,000 a 5,000 en 7 entidades federativas en lugar de 10.</p> <p>b) Para poder constituir un partido político nacional se deberá acreditar 3,000 afiliados por lo menos en 20 entidades federativas en lugar de 10, o en 200 distritos electorales en lugar de 100.</p> <p>c) Las asambleas constitutivas para la asociación solicitante de registro como partido político las deberá realizar en por lo menos 20 entidades federativas en lugar de 10, o en 200 distritos electorales. Dichas asambleas deberán realizarse en presencia de un funcionario del Instituto Federal Electoral.</p> <p>d) Se establece que solo las agrupaciones políticas tienen derecho a solicitar el registro como partido político.</p>
2005	<p>a) Se aprueba en la Cámara de Diputados el derecho a voto de mexicanos que viven en el extranjero (junio de 2005).</p>
2007	<p>a) Se establece que los partidos políticos solo podrán acceder a los espacios de radio y televisión a través de los tiempos que establece la ley, siendo el Instituto Federal Electoral la única instancia administradora de tiempo tanto en el nivel federal como en el local.</p> <p>b) Se prohíbe a los partidos políticos, precandidatos y candidatos que contraten o adquieran por sí mismos o por medio de terceras personas, tiempo en radio y televisión.</p> <p>c) Cuando tengan lugar procesos electorales federales, el financiamiento público de cada partido político será equivalente al 50%; cuando solo se elijan Diputados federales será del 30%.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> d) Se crea la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos. e) Se crea una Contraloría General con autonomía técnica y de gestión para la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto Federal Electoral. f) El tiempo de campaña durante el proceso de elecciones federales será de 90 días; en caso de que solo se elijan Diputaciones federales el tiempo será de 60 días.
2014	<ul style="list-style-type: none"> a) Se sustituye el Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. b) Se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que sustituye al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. c) Se crea la Ley General de Partidos Políticos. d) El Instituto Nacional Electoral podrá atraer la organización de procesos electorales locales siempre y cuando existan suficientes causales que afecten la paz pública, la imparcialidad o en su caso, la clara intervención del gobierno local. e) El Instituto Nacional Electoral administra los tiempos en radio y televisión de los partidos políticos que en total suman 30 minutos diarios en cada estación. f) El Instituto Nacional Electoral les asignará prerrogativas a los partidos políticos a través de los Organismos Públicos Locales Electorales, entre las cuales dispondrán de 41 minutos de acceso a radio y televisión en conjunto. g) Se establece la obligatoriedad de 2 debates televisados entre candidatos a la Presidencia de la República. h) El Instituto Nacional Electoral estará a cargo de lo relativo a la distritación, capacitación, padrón electoral, lista nominal de electores, resultados preliminares y fiscalización de los partidos políticos. i) En el caso de las elecciones presidenciales, los candidatos independientes deberán acreditar el 1% de la lista nominal y el 2% para otros cargos.

Fuente de elaboración propia con base en Rodríguez Araujo y Sirvent (2005) y en Cazarín (2021).

La insatisfacción con la representación política de aquellos años trastocó los cimientos del régimen y se puso sobre la mesa la importante necesidad de adoptar nuevas reglas para las elecciones y los organismos encargados de llevarlas a cabo, así como lo relativo a las instituciones jurisdiccionales en la materia.

Cuando observamos el diseño institucional mexicano actual, se puede vislumbrar que los procesos electorales son debidamente regulados por instituciones especializadas y que se ejecutan de una forma adecuada y transparente. Pero, en este sentido, las dificultades provienen de la práctica efectiva en contextos complejos de estos principios reguladores.

Por otro lado, en la medida en que se mina la integridad electoral, se reconoce la presencia de malas prácticas electorales dentro de las etapas del proceso. Esta condición es claramente negativa para la correcta ejecución de los procesos electorales y para la posterior legitimidad de los gobiernos electos.

Objetivos

Este proyecto de investigación tendrá como guía los siguientes objetivos:

1.- Precisar cuál es la percepción de malas prácticas electorales entre las y los supervisores y capacitadores-asistentes electorales durante los procesos electorales de San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022).

2.- Explicar cuál es la percepción de malas prácticas electorales entre las y los supervisores y capacitadores-asistentes electorales cuando la candidata o candidato vencedor pertenece (o no) al mismo partido político que se encontraba en el poder ejecutivo en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022).

3.- Comprender cuál es el vínculo que tiene la percepción de malas prácticas electorales por parte de las y los supervisores y capacitadores-asistentes electorales en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022) cuando los resultados electorales fueron cerrados o amplios en su diferencia entre los dos primeros lugares.

Preguntas

1.- ¿Cuál es la percepción acerca de las malas prácticas electorales durante los procesos electorales de San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022) entre las y los supervisores y capacitadores-asistentes electorales?

2.- ¿Cómo se manifiesta la percepción de las malas prácticas electorales en las y los supervisores y capacitadores-asistentes electorales cuando la candidata o candidato vencedor pertenece al mismo partido político (o no) que se encontraba en el poder ejecutivo en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022)?

3.- ¿Cuál es la vinculación que tiene la percepción de malas prácticas electorales entre las y los supervisores y capacitadores-asistentes electorales en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022) cuando los resultados electorales fueron cerrados o amplios en la diferencia entre el primer y segundo lugar de la competencia?

Hipótesis

Hipótesis 1

La percepción acerca de las malas prácticas electorales entre las y los supervisores y capacitadores-asistentes tiene un porcentaje alto con respecto al ciclo electoral electorales en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022).

Hipótesis 2

La vinculación de la candidata o candidato vencedor con el partido político en el poder ejecutivo es un factor que influye en la percepción de malas prácticas electorales por parte de las y los supervisores y capacitadores-asistentes en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022).

Hipótesis 3

La percepción de malas prácticas electorales por parte de las y los supervisores y capacitadores-asistentes en San Luis Potosí y Aguascalientes (2021-2022) tienen una relación positiva con los resultados electorales porcentualmente cerrados con relación a los primeros dos lugares.

Marco teórico

Importancia de las elecciones en condiciones de igualdad

La democracia, ha sido la forma de gobierno adoptada en la mayoría de los países a partir de la segunda mitad del siglo XX. Su establecimiento y desarrollo a atravesado por una serie de vaivenes debido a las características propias de cada país y a las dificultades contextuales de la época.

En este sentido, la democracia ha estado sujeta a una dotación de ciertas cualidades que se le atribuyen desde la teoría, cualidades que, de ser adoptadas por las democracias reales, suponen un mejor funcionamiento y cercanía a los objetivos ideales desde los cuales la justifican como la forma de gobierno más adecuada.

Establecer todas y cada una de las cualidades o características de las cuales se ha dotado a la democracia excede los propósitos de este trabajo, por lo cual el análisis se centrará en solo algunas de estas cualidades. Partiendo de esta base, la literatura que se especializa en la democracia ha argumentado que esta forma de gobierno tiene como uno de sus rasgos fundamentales a la igualdad política entre los ciudadanos. Por lo tanto, “en el gobierno de esta asociación [democracia] todos los miembros deben de considerarse como políticamente iguales” (Dahl, 2022: 43).

Atendiendo a este principio democrático, todos los ciudadanos que estén bajo una forma de gobierno de esta índole deben de tener una igual consideración en los asuntos públicos y políticos. Si un ciudadano, bajo cualquier circunstancia se encuentra en un panorama que mine su igualdad política, se resquebraja el carácter democrático del régimen. La atención a la igualdad política tiene como referencia la atención a los intereses de los

ciudadanos, intereses que se manifiestan plurales con el avance de las democracias modernas. Por lo que, “si se nos priva de una voz igual en el gobierno del Estado, hay posibilidades muy altas de que no se dote de la misma atención a nuestros intereses que a los de aquellos que si tienen voz” (Dahl, 2022: 90).

La atención a los intereses de los ciudadanos está íntimamente ligada con la posibilidad que se tenga de manifestar las preferencias políticas. Como lo puntualiza Robert Dahl (1989), para que un gobierno de una respuesta efectiva a las preferencias de sus ciudadanos necesita, invariablemente, una igual oportunidad de formular preferencias, manifestar públicamente esas preferencias y recibir igualdad de trato por parte del gobierno y que ese trato no este condicionado por las preferencias manifestadas.

Continuando con el punto anterior, la democracia es una forma de gobierno que se ha edificado sobre la base de establecer condiciones preferibles para sus ciudadanos en contraste con otras variaciones de gobierno existentes. Entre estas condiciones destaca precisamente, la oportunidad que tienen para ser participantes activos en la configuración de decisiones, mediante la selección de representantes en el caso de las democracias modernas y que han de impactar a la totalidad de los individuos.

En virtud de la participación indiscriminada de los individuos (entendiendo a la población adulta como la que conforma a este sector participante) es donde la democracia encuentra una de sus justificaciones sustanciales. Por esta razón se comparte la idea de que “la democracia no se justificaría principalmente como un procedimiento para lograr decisiones correctas, sino para establecer una autoridad legítima a través del ejercicio de los derechos de participación política reconocidos a los ciudadanos” (Arcos, 2012: 17).

El establecimiento de una autoridad legítima se puede lograr en tanto las ciudadanas y ciudadanos participan en su instauración. Esta autoridad solo es legítima en la medida que obedece a la manifestación de las preferencias ciudadanas debidamente expresadas bajo un procedimiento democrático instituido con esa finalidad.

En la democracia, el ciudadano posee diversas herramientas de las cuales puede hacer uso para una efectiva manifestación de las preferencias políticas. Herramientas o mecanismos entre los que se pueden encontrar la expresión en el espacio público, la inscripción en

asociaciones o partidos, entre otros. Pero, un mecanismo de manifestación de las preferencias que es básico para la existencia de la democracia y su justificación de establecer una autoridad legítima mediante la participación política de los individuos, son las elecciones. A través de ellas, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar su adscripción a un determinado proyecto político o aislarse de él. Mediante el voto, los ciudadanos establecen sus preferencias políticas que posteriormente han de constituirse en autoridad legítima.

Por tanto, se advierte que “la democracia tiene como un punto de apoyo imprescindible la realización de elecciones libres porque permiten, entre otras cosas, que las personas expresen de forma genuina su opinión respecto a quién o quiénes deben ocupar las responsabilidades de gobierno para materializar ciertas ideas o principios” (Rubio y Borjas, 2017: 41). Es por el conducto electoral mediante el cual se plasman las diferentes preferencias de los ciudadanos, preferencias que, como se ha señalado anteriormente, deben estar protegidas por el principio de igualdad política que supone la democracia.

De esta revisión, se puede acordar que las elecciones representan un soporte para edificar una democracia que sea funcional y acorde con sus preceptos básicos. Por lo anterior, se dirime que “las elecciones no agotan todas las posibilidades de esta [la democracia], pero no puede haber democracia si no existen elecciones que provean a las sociedades de un mínimo de garantías para participar de forma libre en la competencia y respecto la certidumbre de los resultados” (Rubio y Borjas, 2017: 42). De esta afirmación se vislumbra la importancia que contiene para un régimen democrático contar con elecciones que reúnan ciertas características para enarbolar una bandera de certidumbre para las ciudadanas y ciudadanos de que sus preferencias se vean reflejadas en el campo político de una manera fidedigna.

Siguiendo la afirmación anterior, es pertinente retomar el pensamiento de Robert Dahl para establecer cuáles son algunos de los elementos indispensables para la celebración de elecciones en un régimen democrático. Por tanto, al aceptar la premisa de la igualdad política como base democrática indispensable, “entonces todo ciudadano debe tener una oportunidad igual y efectiva de votar, y todos los votos deben de contarse como iguales. Si ha de realizarse la igualdad de voto, la consecuencia es que las elecciones deben ser libres e imparciales” (Dahl, 2022: 111). De este planteamiento se extrae que las elecciones, como medio de

participación ciudadana en los asuntos públicos y como vía para la manifestación de las preferencias, deben descansar sobre cimientos de libertad e imparcialidad como fundamentos básicos para el desarrollo de los comicios. Si los ciudadanos no gozarán de una oportunidad igual de votar, es decir, si no existiese la base de la libertad e imparcialidad en las elecciones, la igualdad política como principio que apoya la manifestación de las preferencias, se vería disminuida.

La igualdad política es un elemento principal de la vida democrática, por lo tanto, todo ciudadano y ciudadana debe tener la misma oportunidad efectiva de participar en las elecciones, las cuales son una condición indisoluble de la democracia. La igualdad política tiene su sustento en el argumento de que todos los individuos que pertenecen a una sociedad poseen la misma capacidad para desarrollar una opinión respecto de cuál 'es el rumbo político que deberían de esgrimir los tomadores de decisiones.

Las preferencias políticas derivadas del proceso individual de reflexión que corresponde a cada integrante de la sociedad representan el fundamento esencial acerca del camino que debería ser recorrido por los representantes electos. Por ello, la igual oportunidad para manifestar la preferencia hacia un determinado proyecto político es una piedra angular del proceso de los comicios de cualquier sociedad.

Las elecciones que parten de una igual oportunidad de sus ciudadanos y ciudadanas para expresar su orientación en el sufragio suponen una mayor legitimidad al proceso, ya que la igualdad política se denota a partir de la libertad de cada individuo para ejercer su derecho a la participación y de la imparcialidad de las instituciones electorales para hacer valer esa libertad.

Por lo tanto, está presente una relación intrínseca entre la igualdad política de cada ciudadano para expresarse libremente durante los procesos electorales y la limpieza del mencionado proceso. A partir de elecciones limpias e integrales, la legitimidad de la autoridad emanada de dicho proceso es estable.

Si en algún momento se limitara la igualdad de los ciudadanos para manifestar sus preferencias, derivado de prácticas que vulneren su libertad para formular esas preferencias,

el proceso democrático dinamitaría uno de sus elementos sustanciales. En la Figura 2 se desarrolla gráficamente el argumento de la relación entre democracia e igualdad política.

Figura 2. Relación entre democracia, igualdad política y elecciones.



Fuente de elaboración propia

Integridad electoral y malas prácticas electorales

En el desarrollo de la investigación, tendrá una función importante el cuerpo teórico de la integridad electoral como contraparte de las malas prácticas electorales, como punto inicial del cual se puede comprender los elementos que legitiman a los procesos electorales y a los gobiernos que tienen su origen en los mencionados procesos. Por otro lado, el

desglosamiento de los componentes de las malas prácticas electorales permitirá identificar cuando éstas se presenten en el periodo de elecciones analizado.

En este sentido, la integridad electoral hace referencia a “las convenciones internacionales acordadas y a las normas universales sobre las que reflejan las normas mundiales que se aplican a todos los países del mundo a lo largo del ciclo electoral, incluso durante el período preelectoral, la campaña, el día de los comicios y el período posterior” (Norris, 2014: 1). En consecuencia, la buena conducción de las elecciones tiene un apego importante a estándares que han sido internacionalizados a través del tiempo y de la experiencia. Es importante subrayar que estas normas o estándares internacionales corresponden a cada una de las etapas del ciclo electoral, por lo que estas etapas, en ánimo de profundizar las buenas prácticas y la limpieza electoral, deben sujetarse a estas normas.

Las convenciones internacionales adoptadas por los Estados, parten en gran medida de los principios rectores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales hacen alusión en sus artículos al derecho de los ciudadanos a participar en elecciones periódicas, principios que tienen un proceso de interiorización en los valores de la población de los estados (Norris, 2014). De esta manera, se observa que los preceptos internacionales en materia electoral guardan una estrecha relación con los derechos humanos reconocidos, derechos entre los que pueden sobresalir en un plano internacional, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual plasma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos [...]” (Naciones Unidas, 2015: 4). De este artículo se coloca en el plano internacional de derechos la libertad inherente a cada individuo y su igualdad frente a los demás.

En lo que respecta al artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que todos los individuos gozaran de todos los derechos “[...] sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (Naciones Unidas, 2015: 6). De esta manera, se vuelve a retomar la condición de igualdad de todos los individuos, sin importar cualquier condición individual. Por su parte, el artículo 21 de esta misma Declaración instituye que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto” (Naciones Unidas, 2015: 44), lo cual, establece las bases para un procedimiento de elección democrática en el interior de los Estados .

La relación que sostienen estas normas sobre derechos humanos con el concepto de integridad electoral descansa sobre el argumento de que todo el ciclo electoral debe de ajustarse a estándares y normas internacionales. Por lo tanto, se advierte que para que el proceso electoral se ajuste a la integridad, la libertad y la igualdad son condiciones fundamentales para conducir todas las etapas del proceso. Aunque esta libertad e igualdad hacen alusión a todas las etapas y a todos los actores involucrados en el proceso electoral, estas condiciones fundamentales deben observarse especialmente en un factor imprescindible de las elecciones, el voto.

Las elecciones tienen como propósito fundamental ser un canal a través del cual las y los ciudadanos expresan sus preferencias políticas y su voluntad acerca de quienes deben de dirigir temporalmente los asuntos políticos de la sociedad. La relación efectiva entre la configuración de un gobierno emanado de las elecciones y las preferencias políticas de los individuos descansa sobre la base de la igualdad y libertad política para manifestar preferencias, la cual es establecida, como hemos visto, desde la esfera de la normatividad y experiencia internacional.

El caso de la interiorización de estos principios en el seno de una población es un factor que puede explicar el porqué de la complejidad de establecer una definición clara de integridad electoral, ya que este proceso es dinámico y particular de cada sociedad, además que las convenciones y pactos internacionales evolucionan en sus principios en respuesta a la complejidad creciente de las sociedades.

Otro aspecto referente a la importancia de los convenios internacionales en materia electoral es precisamente la existencia de instrumentos de cooperación a partir de los cuales se fortalece la limpieza y, por consiguiente, la legitimidad de los comicios. Debido a los convenios internacionales ha existido un crecimiento importante de las misiones de observación electoral por parte de organismos internacionales a partir de la década de 1980 como elemento que coadyuva a garantizar la limpieza en las elecciones (Norris, 2014). Estas misiones de observación electoral se han convertido con el paso del tiempo en un factor

recurrente en los procesos electorales de distintos países. Debido a la cada vez más recurrente práctica de las observaciones internacionales durante los procesos electorales, los estados que se niegan a abrir las puertas del proceso electoral anuncian de antemano la posible existencia de irregularidades en el proceso (Norris, 2014).

Como ya se ha señalado, los principios que se han adoptado por las convenciones internacionales deben de ser observados en todas las etapas del ciclo electoral, las cuales están compuestas por el diseño de la legislación, contratación y capacitación del personal electoral, el registro de los votantes y de los partidos políticos, la designación de candidatos, la campaña electoral, la votación, el recuento de los votos, los resultados, la declaración de los resultados, la resolución de disputas electorales, presentación de informes, la auditoría y el archivo (Norris, 2014). La integridad electoral desde esta perspectiva comprende la observación de los principios democráticos aceptados en las convenciones internacionales en las elecciones de los estados en cada una de las etapas del ciclo electoral, principios que pasan por un periodo de interiorización en el núcleo de los valores sociales de la población.

Un punto de vista que refuerza esta visión es que las elecciones con integridad están “basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral” (IDEA, 2012: 6). En concordancia con la definición anterior, resalta la importancia de valores democráticos que se manifiestan en las normas internacionales adoptadas por los estados. Además, se considera la importancia de la imparcialidad de las autoridades electorales como garantía de la pulcritud del proceso.

Es necesario señalar que la conducta íntegra durante los procesos electorales no se agota en los actos realizados por las autoridades electorales, la integridad debe de alcanzar a todos los actores que participan en el ciclo electoral, por lo que los partidos políticos, actores privados, representantes de partidos y candidatos, electores, entre otros, tienen la responsabilidad de conducir sus actividades desde los parámetros antes enunciados.

En contraste con la integridad electoral y sus principios, el estudio de las malas prácticas electorales nos da cuenta de elementos que, por sus características, son nocivos para el desarrollo de las elecciones y posteriormente para la legitimidad del gobierno electo, tras

erosionar principios fundamentales de la democracia, la libertad y la igualdad política. Las malas prácticas electorales se pueden dividir en tres tipos, entre ellas se encuentra la manipulación de las normas, la manipulación de los votantes y la manipulación del voto (Birch, 2011).

En el caso de la manipulación de las normas, se hace alusión a “la distorsión de las leyes electorales para beneficiar a un partido o a un candidato en una elección ” (Birch, 2011: 2). Esta mala práctica electoral tiene lugar cuando el proceso electoral no está en marcha (en el caso de los países que tienen candados para limitar la legislación en materia electoral una vez iniciado el proceso), por lo que el ámbito legislativo se encuentra en el centro del problema debido a que es en esta esfera donde se producen las leyes que serán posteriormente aplicables. Este tipo de manipulación se puede presentar cuando el diseño normativo impide que se presenten a elecciones ciertas candidaturas o cuando se excluye del derecho de votar a determinados sectores de la población (Birch, 2011).

La manipulación de los votantes se divide en dos formas principales, a saber, “los esfuerzos por distorsionar las preferencias de los votantes y los esfuerzos por influir en la expresión de las preferencias” (Birch, 2011: 3). En lo que respecta a la distorsión de las preferencias de los votantes, se recurre a ciertas formas ilegales de campaña, como uso ilícito de recursos públicos, preferencia de cobertura mediática hacia un partido o candidato o financiamiento que rebasa lo establecido por la ley (Birch, 2011). En otras palabras, la distorsión de las preferencias de los votantes se deriva de acciones orientadas a publicitar a un partido o candidato que están expresamente prohibidas por la ley. Los esfuerzos por influir en la forma en que se expresan las preferencias de los votantes se sirve de tácticas como la compra y coacción del voto (Birch, 2011). La manipulación del votante como mala práctica electoral atiende dos vertientes que giran alrededor del elector, una está dirigida a influir en la concepción política individual (la distorsión de las preferencias) y la otra se encuentra encaminada a modificar la forma en como votaría el elector en ausencia de esta práctica (influencia en la expresión de las preferencias).

Por último, la manipulación del voto se manifiesta “a través de una variedad de diferentes formas de mala administración electoral, desde actos clásicos de fraude, personificación, relleno de urnas, la presentación de informes erróneos, hasta otros actos más

sutiles a favor o en contra de un candidato concreto” (Birch, 2011: 3). Además, la mala administración electoral puede traducirse en la ausencia de accesibilidad de votación en espacios importantes para la oposición, la parcialidad en la organización de las elecciones y en las resoluciones electorales (Birch, 2011). Si en el caso de la manipulación de las normas se mostraba como centro de atención las actividades legislativas, en lo que respecta a la manipulación del voto se reconoce como actores fundamentales a las unidades encargadas de administrar el proceso electoral, esto es, las autoridades electorales. Los ejercicios acerca de determinar la cartografía electoral, la organización, informes, resolución de conflictos están a cargo de las autoridades electorales, los cuales deben de realizarse con imparcialidad, sin inclinar el terreno hacia ningún contendiente. Cuando esto no sucede así, se está en presencia de una mala práctica electoral.

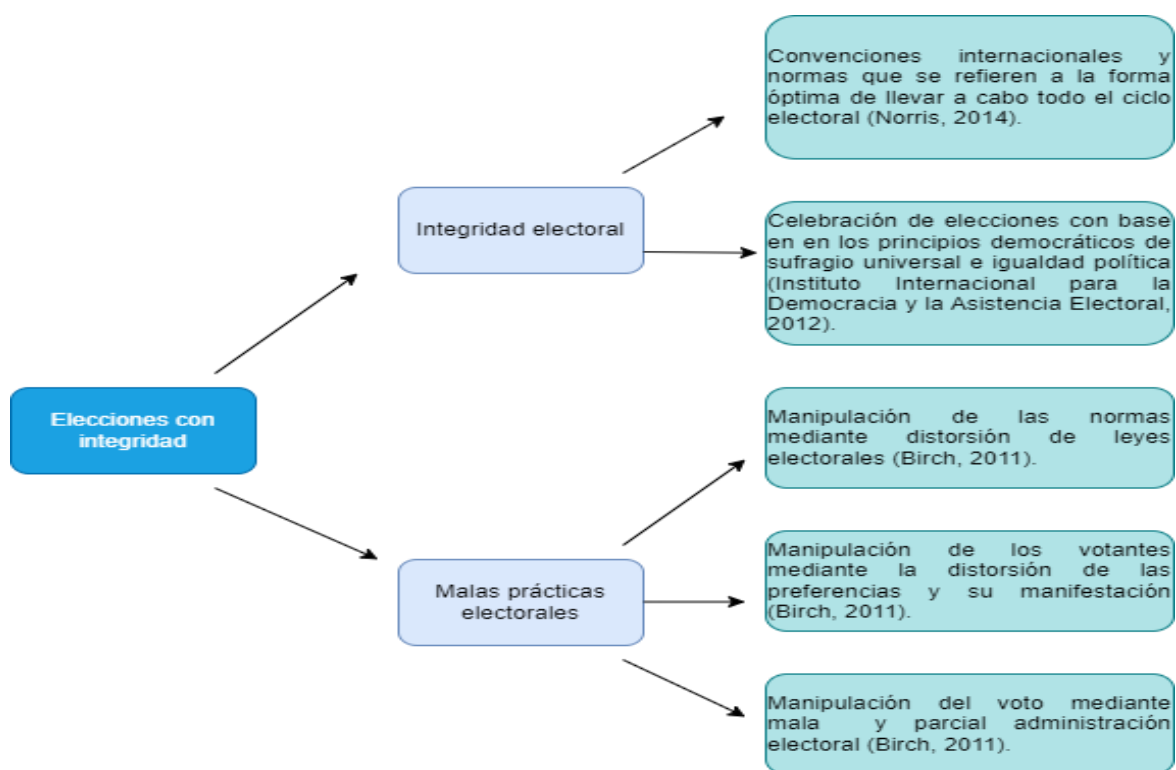
Estas expresiones de malas prácticas electorales tienen un efecto negativo en los principios que deben observarse en las elecciones de los estados democráticos. Representan un esfuerzo por parte de los actores políticos por sacar una especie de ventaja en la competencia por los cargos públicos en relación con sus opositores, minando de esta manera la voluntad de los electores para la constitución del gobierno.

En cuanto a lo que se refiere a los principios básicos de cualquier proceso democrático, la libertad y la igualdad política, se ha observado que estos principios suponen una referencia primordial para el desarrollo de la vida democrática, más aún de un proceso fundamental como lo son las elecciones en democracia. Las elecciones, como expresión básica de participación ciudadana y como medio fundamental para la manifestación de las preferencias políticas de las y los ciudadanos tiene una importancia notable para la legitimidad del gobierno que emanara de este proceso, por lo que se debe de asegurar el derecho de participación a todos sin distinciones arbitrarias o de otra índole, esto es, la igualdad política.

Las malas prácticas electorales dirigen su actividad a coartar la posibilidad del individuo a decidir por sí mismo, orientando su preferencia política, estableciendo reglas que inclinan la balanza a favor de alguna opción política o administrando parcialmente los procesos electorales. En la medida que estas prácticas tienen una mayor repercusión en ciertos individuos en concreto, la igualdad política se ve transgredida.

La importancia del estudio de las malas prácticas electorales radica en que una vez que estas se presentan durante cualquier etapa del ciclo electoral se desvía la limpieza del proceso democrático y por lo tanto surge la interrogante acerca de la validez que podrían tener las elecciones en análisis. Por otro lado, las malas prácticas electorales privan de una posibilidad igual a los sujetos que se ven expuestos a ellas de participar libremente en los procesos electorales, estableciendo diferencia en las condiciones en las cuales se emiten los votos. En la figura 3 se desarrolla gráficamente los componentes básicos de la integridad electoral y las malas prácticas electorales.

Figura 3. Integridad electoral y malas prácticas electorales.



Fuente de elaboración propia con base en Birch, Sarah (2011), Norris, Pippa (2014) e IDEA (2012).

Tipos de malas prácticas electorales

Como se argumentó en el apartado anterior, las malas prácticas electorales se dividen en distintas categorías, las cuales a su vez están constituidas por diversos tipos de malas

prácticas electorales. Estos tipos de malas prácticas electorales sostienen lógicas diferentes entre ellas, pero sus consecuencias representan un mismo daño al ciclo electoral y a su óptimo funcionamiento.

Dentro de la categoría de la “manipulación del votante”, se advierten dos subcategorías, las cuales son la distorsión de las preferencias y la influencia en la expresión de las preferencias. En cuanto a la distorsión de las preferencias existen prácticas que se ponen en funcionamiento para la obtención del voto ciudadano. Vinculado a ello “un actor político puede tergiversar de alguna manera la información que reciben los ciudadanos para persuadirlos de votar por él en vez de por otro actor político que podrían haber preferido” (Serra, 2016: 410). A esto Gilles Serra se refiere como desinformar al votante. Al tergiversar la información a la que la ciudadanía se encuentra expuesta, se perfila una distorsión de las preferencias manifestadas en los sufragios. Esta mala práctica electoral se puede suscribir a las etapas del ciclo electoral en las cuales ya se han fijado las candidaturas que competirán por los cargos públicos a elegir.

En cuanto a la influencia en la expresión de las preferencias adscrita a la manipulación del votante, han tenido lugar dos actividades en el escenario electoral mexicano (y de otras partes del mundo), estas son la compra y coacción del voto. Respecto a la primera, la podemos entender como “el intercambio explícito de regalos o favores para que el individuo vote de cierta manera” (Serra, 2016: 415). por otra parte, Wayne Cornelius identifica que “la compra involucra el intercambio de beneficios materiales y servicios por votos” (Cornelius, 2002: 14).

Para que podamos identificar una situación en la cual presuntamente se está realizando una compra de voto, según la literatura tiene que existir un intercambio entre el actor político y el sufragante, intercambio que supone algún bien para el individuo y que este determine su orientación a la hora de emitir su voto.

La segunda forma de influir en la manifestación de las preferencias, es decir la coacción del voto, se puede comprender como “como la amenaza de quitar algún beneficio o aplicar algún castigo al individuo si no vota de cierta manera” (Serra, 2016: 419). esta práctica se base en la posibilidad de conminación del individuo para determinar su

orientación electoral. Una aseveración con mayor amplitud la proporciona Wayne Cornelius (2002: 14) al argüir que:

La coacción se refiere a un conjunto de actividades que van desde la violación al voto secreto dentro de los lugares de votación, hasta la intimidación de los votantes fuera de los mismos, la confiscación de sus credenciales de elector, y/o el registro de los números de dichas credenciales durante el periodo anterior a las elecciones, el condicionar la distribución de algún servicio o beneficio gubernamental al voto por un partido o candidato específico, además de amenazas de violencia física.

Esta conceptualización brinda un panorama más amplio de la gama de actividades que tienen como propósito coaccionar el voto de los individuos. Traslada las acciones de los actores políticos hasta las ubicaciones de las mismas casillas y otorga énfasis a los ejercicios ilícitos realizados con las credenciales de elector. Todas estas maneras de proceder durante el ciclo electoral son muestra de la vulneración de los derechos de participación libre de las y los ciudadanos.

Un patrón común a las malas prácticas electorales hasta ahora enunciadas que encuentra Gilles Serra (2016: 411) es que “en época de elecciones, un agente político (por ejemplo, un candidato o un partido) trata de obtener el voto de los ciudadanos con métodos antidemocráticos (por ejemplo, comprándolos, coaccionándolos o desinformándolos) abusando de los recursos a los que tiene acceso”. Por esta razón puede establecerse que las elecciones son susceptibles ante las malas prácticas electorales ejecutadas por los actores políticos participantes. Además, que dichas prácticas son medios que transgreden a la democracia y sus fundamentos básicos.

Referencias

Arcos, Federico. 2012. "Regla de la mayoría, democracia deliberativa e igualdad política". Anales de la Cátedra Francisco Suárez, pp.13-36.

Birch, Sarah. 2011. Electoral Corruption. United Kingdom: Institute for Democracy and Conflict Resolution.

- Cazarín, Angélica. 2021. "Las Reformas Político-Electorales y su impacto en el sistema electoral mexicano" en Asociación Española de Ciencia Política y Administración, pp. 1-16
- Cornelius, Wayne. 2002. "La eficacia de la compra y coacción del voto en las elecciones mexicanas de 2000". Perfiles Latinoamericanos, pp. 11-31.
- Dahl, Robert. 1989. La poliarquía. Participación y oposición. Madrid: Tecnos.
- Dahl, Robert. 2022. La democracia. Ciudad de México: Ediciones Culturales Paidós.
- IDEA. 2012. Profundizando la democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo. Suecia.
- Naciones Unidas. 2015. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Norris, Pippa. 2014. Why electoral integrity matters. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Rodríguez Araujo, Octavio, y Sirvent, Carlos. 2005. Instituciones Electorales y Partidos Políticos en México. México: Jorale Editores.
- Rubio Ortiz, Patricio, y Hugo Borjas García. 2017. La democracia y las elecciones en San Luis Potosí en La democracia inhospitalaria. Estudios multidisciplinarios sobre la vida pública en San Luis Potosí. El Colegio de San Luis. pp. 39-55
- Serra, Gilles. 2016. "Comprar, coaccionar y desinformar al votante. Problemas duraderos de la democracia mexicana". Política y gobierno, pp. 409-35.